

En la búsqueda de un tiempo perdido

por **D. Oscar Arias Sánchez**

*Conferencia pronunciada
el 22 de noviembre de 1994*

Forum Deusto

En la búsqueda de un tiempo perdido

por D. Oscar Arias Sánchez*

Agradezco profundamente la invitación que he recibido, desde la Dirección de Cooperación al Desarrollo del Gobierno Vasco, y desde la Universidad de los Padres Jesuitas de Deusto, para que participe en esta serie de conferencias sobre desarrollo y paz en América Latina, bajo el sugerente título de «Visión autocrítica desde el Sur».

Como ocurren estas cosas, se ha dado a mi comparecencia el título de «En la búsqueda del tiempo perdido», en probable referencia al tiempo que América Latina no aprovechó para llegar más temprano a la modernidad y a la democracia. Recuerdo que, con motivo de la conmemoración del 500 aniversario de la llegada de Cristóbal Colón al Caribe,

* Don Oscar Arias Sánchez nació en Heredia, Costa Rica, en 1940. Realizó estudios universitarios en la Universidad de Costa Rica, donde se licenció en Derecho y Ciencias Económicas. En 1974 se doctoró en Ciencias Políticas por la Universidad de Essex. A su regreso de Inglaterra, ejerció varios años la enseñanza en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica. Ocupó luego el cargo de Ministro de Planificación y Política Económica de Costa Rica hasta 1978, año en el que pasó a formar parte de la Asamblea Legislativa hasta 1982, y en 1986 asumió la Presidencia de su país hasta 1990. Su iniciativa para alcanzar la paz en Centroamérica culminó con la firma de los acuerdos de Esquipulas II en 1987. En ese mismo año se le concedió el Premio Nobel de la Paz y el Premio de la Paz Martin Luther King. Desde 1988 ha recibido doctorados honoris causa de Universidades como Harvard, Oviedo, Essex, Indiana e Illinois, y ha sido galardonado con varios premios, como el Premio Príncipe de Asturias. El Dr. Arias forma parte activa del SIPRI, el Centro Internacional para los Derechos Humanos y el Desarrollo Democrático, el Centro Carter, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, etc. En la actualidad el Dr. Arias desarrolla sus actividades internacionales desde el Centro para la Paz de la Fundación Arias, a la cual él aportará la totalidad del importe monetario del Premio Nobel. Desde el Centro, participa activamente en todos los procesos globales que favorecen el desarrollo, la resolución pacífica de los conflictos, la desmilitarización y el desarme.

un original editor sudamericano nos solicitó a varios dirigentes y escritores de nuestro continente, artículos para una antología —nunca publicada por cierto—. En el proyecto, el libro llevaría un título que me hizo tomar la precaución de consultar el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, específicamente en la letra jota. Ahí me enfrenté a una palabra, calificada de «voz malsonante», cuya acepción principal sugiere la idea de entidad violada, de algo abyectamente demolido.

Pero otras acepciones, también poco benévolas, corresponden con buena aproximación al significado que en mi país se le da a la palabra «fregar» que, curiosamente, entre nosotros casi no se emplea para designar la acción de limpiar enérgicamente los implementos de cocina o el piso de una habitación. En Costa Rica, una persona, una cosa, una institución o una idea «se frega» cuando sufre un colapso, cuando fracasa y ya no tiene salida, cuando todo se ha acabado. El sentido es el mismo, pero la palabra no es tachada de malsonante por el diccionario, y por eso me siento más tranquilo si se me permite comenzar con la pregunta planteada en el título de la frustrada antología, pero hecha a la manera costarricense: ¿Es que América Latina se fregó sin remedio? ¿Es posible recuperar el tiempo perdido?

La memoria histórica

Si nos apejáramos estrictamente al sentido de aquel título imposible, estaríamos aceptando que hubo un momento de la historia en el que América Latina sufrió el equivalente a una violación, y que de ahí en adelante le tocó la poco envidiable suerte que, en un mundo machista, le es reservada a la mujer víctima de la agresividad lujuriosa del macho. Del mismo modo, aceptaríamos la sugerencia de que hubo un momento históricamente definido en el que todavía existía una América Latina intocada, provista de un insospechado conjunto de virtudes que la habilitaban para un magnífico y honorable matrimonio con un mundo que debió comenzar por cortejarla con consideración, un mundo que habría de compartir con ella un futuro sin violencia y con igualdad de oportunidades para todos los pueblos.

Pero la historia nos enseña que no existe comunidad, grande o pequeña, que haya ido al encuentro con el mundo como se llega a un matrimonio siciliano. Todas han sufrido o han ejercido alguna vez la violencia, y es posible que no haya una sola que no guarde en su colección de símbolos uno alusivo a la lucha por su identidad, su libertad o su independencia. Lamentablemente, la memoria histórica de los pue-

blos se nutre tanto de la gloria de haber «fregado» a otros, como de la humillación de haber sido «fregados» por otros. De hecho, la remembranza, real o mítica, de los momentos en que estuvieron o las tuvieron «fregadas», constituye un elemento básico para la cohesión y la supervivencia de las colectividades humanas.

Desde luego, una sociedad puede «fregarse» ella misma, sin ayuda externa, mediante la adopción de creencias, costumbres, ideologías o instituciones autodestructivas. A esta posibilidad se refieren quienes tratan de «fregarnos» atribuyendo a los pueblos latinoamericanos una propensión natural al subdesarrollo o una incapacidad intrínseca para la vida democrática. En este punto cabe tener presente que la resistencia represiva a las nuevas ideas suele basarse en la consideración de que, aceptándolas, la sociedad se «fregaría». En América Latina, las cárceles y los cementerios casi siempre han estado repletos de víctimas de los aparatos de represión que pretenden evitar que nos «freguemos» desde dentro. Y es muy cómodo atribuir, a quienes intentan «fregar» desde dentro, un vínculo con el interés de «fregarnos» desde fuera.

¿Descubrimiento o Invasión?

Tras haberse celebrado con bombos y platillos un trivial aniversario más de la primera incursión europea en el continente que hoy llamamos América, es común el empeño por demostrar que fue entonces cuando América Latina «se fregó». Pero, si se toma en cuenta que lo latino alude en último resultado a la herencia cultural de una limitada comarca del mundo grecorromano, mal podría afirmarse que una América destinada a llevar el adjetivo de «latina» fue destruida, asolada, desarticulada, violada o «fregada» por las calzas de unos marinos y aventureros mediterráneos que llegaron a aquellas costas guiados por un probable genovés. Después de todo, América Latina es un nombre formado por dos palabras del más rancio abolengo europeo. Y si bien Amerigo Vespucci fue un actor muy marginal de nuestra historia, no hay duda de que el latino Cristóbal Colón desempeñó un papel destacado en la inauguración de América Latina.

Fue falso el argumento de los mercantilistas europeos en el sentido de que la Conquista —o la Invasión— de América tenía como objetivo principal la expansión del Cristianismo. Pero es irónico pensar que en algún momento el poder romano atribuyó al Cristianismo primitivo el propósito de «fregar» al Imperio y que, siglos más tarde, América fuera

sometida, bajo el estandarte de ese Cristianismo, a la influencia de la tradición grecorromana. Es muy improbable que Cristóbal Colón haya creído que el Cristianismo había «fregado» a Roma. Por el contrario, él condujo a través del océano la prueba de que, todavía en 1492, Roma y su civilización no habían sido totalmente «fregadas» y continuaban su incontenible expansión.

Es, entonces, demasiado temprano para hablar de una América Latina que se «fregó» con la llegada de los españoles. Ciertamente nos preceden más de cinco siglos de frustración, miseria y violencia, pero soy optimista y creo que «fregar» a América Latina será más difícil que «fregar» a Roma, que hay un destino latinoamericano que aún está por cumplirse, y que el mundo, en el próximo milenio, será más latinoamericano que lo que el mundo de 1994 es español o romano.

La paternidad de América Latina

Mal que nos pese, el acontecimiento que hoy no sabemos si llamar descubrimiento, encuentro, choque o invasión, representa el capítulo inaugural de nuestra historia. Que ese capítulo se caracterizó por la violencia y el despojo, por la intolerancia y el crimen, por la avaricia y el genocidio, es innegable, pero todo eso es irreversible.

Si algo o alguien «se fregó» con la llegada de los europeos a nuestro continente, no fue una América Latina para entonces inexistente. A razón de cobrar agravios históricos, ha de reconocerse que la trágica aventura de la Conquista consistió en la violación de la América precolombina, violación generatriz de esta realidad que ahora examinamos bajo el nombre de América Latina y cuyos padres históricos fueron los Colón, los Cortés, los Pizarro, los Valdivia y los Perafán de Rivera, tanto como los Moctezuma, los Garabito, los Tupac-Amaru, los Hatuey y las Malinche. Todos ellos practicaron esa paternidad con la misma inconsciencia de los soldados romanos que un día clavaron en la cruz a un humilde carpintero de Galilea.

No es cuestión de absolver al descubridor, al colonizador o al invasor, de la responsabilidad que le cabe en la emasculación de las civilizaciones precolombinas y en la destrucción de docenas de culturas. El problema es que, si fuera posible pensar en una restitución de lo destruido, ésta no podría significar a su vez la demolición de ese edificio histórico y político que se llama América Latina. No debemos

olvidar, por otra parte, que la invasión europea tuvo, como trágico corolario, el desarraigo por la esclavitud de miles y miles de africanos cuya descendencia se incorporó vitalmente al ser latinoamericano. No se fantasea cuando se afirma que el aporte seminal de África a América Latina ya estaba implícito en la llegada de las tres carabelas al Mar del Caribe.

Si las cosas hubieran sido de otro modo

Lo que ese continente habría sido si los europeos no hubieran intentado su carrera hacia el oeste o hubieran sido rechazados con éxito por las naciones americanas precolombinas, sólo puede ser objeto de especulación académica. De igual manera podríamos preguntarnos cómo sería Europa de no haberse producido las grandes invasiones asiáticas o la ocupación árabe de España, o cuál habría sido la suerte de África sin la catástrofe del tráfico de esclavos. De lo que sí podemos estar seguros es de que, sin el llamado Descubrimiento y sin la llamada Conquista, no habría existido esta América Latina de la que ahora se nos pregunta cuándo fue que se «fregó»... si es que eso llegó a ocurrirle.

Engendrada y nacida sobre un lecho de sangre, lo que hoy es América Latina no habría sido posible sin aquella sangre. No es, pues, la conquista española y portuguesa la que pudo haber «fregado» a América Latina, a menos que nos acojamos a las tesis racistas que suponen que este continente habría corrido mejor suerte si el Descubrimiento y la Conquista hubieran estado a cargo de pueblos menos mediterráneos.

Mal de muchos...

La terminología vigente hasta hace poco todavía nos relegaba al área geopolítica menos afortunada de todas. Eramos parte del Tercer Mundo, una denominación conmisericordiosa que apenas servía para esconder, detrás del eufemismo, la condición de «mundo subdesarrollado». Existía, así, un Primer Mundo, el de los países que poseían la mayor riqueza y el mayor poder y se autodenominaban los más democráticos y más respetuosos de la dignidad humana. Existía un Segundo Mundo, el mundo socialista, el de los pueblos que, tras haber alcanzado una presunta liberación de la desigualdad, esperaban que el siglo XXI les trajera el premio de la hegemonía y la prosperidad definitivas.

Para América Latina, el Primer Mundo se presentaba como el del pasado, aquel del cual habían surgido muchos de nuestros males, aquel que nos había ofrecido e impuesto todas nuestras maldiciones. Para muchos esperanzados latinoamericanos, el Segundo Mundo era el del futuro, el que tan sólo requería pequeñas modificaciones para convertirse en nuestra opción más prometedora. Para América Latina, África y la mayor parte de Asia, se reservaba el limbo de la imitación, el que bien podría haber sido declarado sitio del no ser histórico.

Pues bien, de aquella bipolaridad dentro de la que el Norte nos había asignado un papel de subordinación, hoy sólo quedan cenizas. Se derrumbó el gigante comunista y con él un pilar fundamental de aquel sistema de confrontación y hegemonía que durante más de medio siglo nos matuvo casi fuera de la historia. La confundida América Latina descubrió, súbitamente, que aquel Segundo Mundo que tan persistentemente se empeñaba en señalarnos un nuevo camino hacia la prosperidad y la independencia, no era más que una ficción irreplicable y, peor aún, fracasada. Descubrió que los pueblos que, según se decía, habían adoptado la vía del socialismo, figuran entre los grandes «fregados» del siglo xx.

Mal de muchos, consuelo de tontos, dice el dicho popular. En este cierre de cuentas del milenio, pareciera que a los pueblos de Europa Oriental y de la Unión Soviética les ha ido mucho peor que a los de América Latina. Y si nos comparamos con la mayor parte de África y el cinturón meridional e insular de Asia, también aquellas regiones parecieran haber tenido una suerte peor que la nuestra.

Aunque sea consuelo de tontos, no está de más señalar que, entre los «fregados», América Latina no sería la más «fregada». Aparte de que seguramente el Primer Mundo esconde todavía desengaños similares a los que nos deparó el Segundo. Y no se trate de desear el mal ajeno, puesto que nuestra aspiración es contribuir a mejorar el mundo.

Lo que está claro es que, si resucitaran hoy, los observadores del mundo de principios de siglo se llevarían una sorpresa al encontrar que los constructores de la que parecía ser la alternativa política para los pueblos subdesarrollados, dieron un salto de setenta años en el vacío.

Si las circunstancias hubieran sido otras, América Latina podría haber intentado una revolución que la convirtiera en algo similar a lo que al final resultó ser la Unión Soviética: una potencia militar, satisfecha de la posesión de armas nucleares, pero igualmente subdesarrollada en los

planos político, social y económico. Por supuesto, tampoco es un consuelo saber que en los Estados Unidos y en otras sociedades del Primer Mundo hay grandes focos de pobreza que constituyen el precio inhumano de ser una superpotencia militar desarrollada. El armamentismo es otra manera de «fregarse» que nosotros hemos imitado sólo dentro de ciertos límites... y, a pesar de ello, nos ha resultado onerosa.

Las razones del optimismo

En América Latina, al finalizar el año de 1994, solamente en un país hay un gobierno dictatorial. La situación de los derechos humanos ha mejorado notablemente con respecto a los últimos años de la década anterior, y no hay en la región ningún conflicto internacional en ciernes. De 1986 —cuando la situación centroamericana era explosiva y las guerras civiles amenazaban con provocar una conflagración regional— a esta fecha, los avances de la pacificación y la democratización han sido extraordinarios. El carácter autónomo del proceso de negociación mediante el cual esto se logró, es una contundente prueba de madurez política, y una clara indicación de que América Latina tiene la capacidad de resolver autónomamente sus propios problemas.

Hay, pues, buenas razones para ver con optimismo el futuro de nuestro subcontinente. De su propia experiencia, y de la que aquellos países que intentaron la solución de sus grandes problemas por vías totalitarias, los pueblos latinoamericanos han aprendido que, si nos queda una oportunidad de lograr la paz y la prosperidad, ésta sólo puede hallarse en la democracia.

La instauración de la formalidad democrática en casi todas las repúblicas latinoamericanas no significa que se haya impuesto para siempre la paz y la justicia. Sin embargo, la actual situación revela que nuestros pueblos están firmemente dispuestos a desechar las opciones totalitarias que en el pasado nos arrebataron la libertad, a cambio de unas promesas de bienestar que nunca se cumplieron. Revela que los latinoamericanos nos hemos resuelto abandonar las impaciencias sectarias del pasado para acogernos a la posibilidad de alcanzar la justicia y la paz por la vías democráticas.

En este sentido, Costa Rica representa un prometedor ejemplo de los frutos que se pueden esperar de la práctica paciente de la democracia. No se puede afirmar, desde luego, que en sus cien años de demo-

cracia, o en los nueve lustros transcurridos desde que en mi país fue disuelto el ejército, hayamos logrado resolver todos los problemas sociales y eliminar todas las injusticias. Lo importante es que la mejor aproximación a la plena justicia social lograda hasta ahora en América Latina se ha alcanzado sin recurrir a la dictadura, la represión ni la guerra. Este debería ser argumento suficiente para asegurar que la democracia, con sus defectos y sus limitaciones, es el único sistema político aceptable en América Latina.

Nos situamos, pues, en el bando de quienes creemos que América Latina no está «fregada». La complejidad de la realidad latinoamericana nos irrita, pero no nos frustra. Compleja y peligrosa era la situación de Centroamérica antes del proceso de Esquipulas y, sin embargo, no hubo irritación ni frustración que obstaculizara los designios de paz de los presidentes centroamericanos.

Las razones de la prudencia

Ningún optimismo nos llevará a menospreciar los retos que tenemos por delante. La democracia hemisférica se enfrenta a problemas grandes y delicados. La insurgencia armada es permanente en países como Perú, Guatemala y Colombia. La paz apenas se estrena en El Salvador, y hay una situación todavía explosiva en Haití. Ahí donde la democracia ha levantado cabeza, las instituciones latinoamericanas no siempre garantizan una participación sostenida de los ciudadanos en la vida política. La crisis económica, cada día más exacerbada, amenaza con desatar nuevamente la violencia y propiciar la incursión de las instituciones militares en los asuntos civiles.

La plaga del militarismo

Para nuestra región, un reto fundamental es la amenaza permanente que representan las fuerzas armadas. En muchos de nuestros países, los militares fueron los que, durante largos períodos, definieron los límites de la autoridad civil. Pero sería simplista creer que las instituciones castrenses fueron siempre fuerzas autónomas que actuaban a su propio arbitrio. Detrás de ellas se han encontrado intereses, internos o externos, que las manipulan y las inducen a irrumpir en la política, a violentar el derecho y a ejercer la represión. Y, como ocurre con cualquier relación de poder en la que los ciudadanos no

son los árbitros definitivos, en algunos países latinoamericanos los militares lograron convertir en rehenes a sus aliados políticos. Las oligarquías, al igual que los funcionarios civiles, quedaron subordinadas a los ejércitos y éstos alcanzaron la autonomía necesaria para que sus integrantes fueran impunes frente a la justicia e, incluso, se convirtieron en un poder económico y empresarial independiente. Hoy, para desaliento de los sectores empresariales, varios ejércitos latinoamericanos son grandes propietarios de tierras, industrias y empresas de servicios.

Podríamos preguntarnos si este énfasis en la importancia de los institutos militares como obstáculo para la democracia no resulta anticuado en momentos en que, precisamente, tiene lugar el resurgimiento democrático en la mayoría de los países latinoamericanos. Además, en otras regiones del mundo se están produciendo cambios que apuntan en el mismo sentido, cambios cuya consecuencia natural debe ser una disminución de la importancia que hasta ahora han tenido las instituciones militares: el fin de la Guerra Fría, el desmantelamiento de los regímenes unipartidistas en Europa, Asia y África, la transformación del régimen racista de Sudáfrica, y la retirada de las tropas soviéticas de ocupación en Europa Central, entre otros.

Sin embargo, quien conozca la historia de América Latina sabe muy bien que las dictaduras militares son un fenómeno recurrente y, aún en los períodos de vigencia democrática, nunca ha sido tarea fácil mantener a las fuerzas armadas confinadas en los cuarteles o dedicadas a las funciones —justificadas o no— de seguridad. Después de todo, pervive el mito de que los ejércitos latinoamericanos actuales son los herederos históricos de la misión que cumplieron los ejércitos libertadores en las guerras de independencia. Sobre ese mito, que los sistemas educativos y la retórica nacionalista exaltan, se pretende legitimar un poder que los mismos próceres de la Independencia consideraron temporal.

Aún en el supuesto de que podamos desarrollar las fórmulas institucionales requeridas para mantener el control civil sobre las fuerzas armadas, y eso acabara con la intromisión de los militares en la política, quedaría otro problema: el impacto económico del mantenimiento de los cuerpos castrenses. Es aquí donde la experiencia costarricense resulta más válida. En el bienio de 1990 a 1991, en mi país, el gasto estatal dedicado conjuntamente a la educación y a la salud fue 20 veces mayor que el dedicado al sector llamado de seguridad, integrado por dos cuerpos policiales encargados de la seguridad ciudadana. Para el conjunto de América Latina, esa proporción fue de 2 a 1. Esto explica por

qué los índices de desarrollo humano de Costa Rica son los más satisfactorios de la región. Esto explica por qué ha sido posible, entre otras cosas, crear y mantener en funcionamiento, en mi país, un sistema educativo y un sistema nacional de salud considerados ejemplares, así como un suministro de agua potable y de electricidad que cubre prácticamente a toda la población.

Ciertamente, en la actualidad no es viable la total eliminación del gasto militar en toda América Latina, pero sí sería posible reducirlo de manera sustancial. Tampoco se encuentra ahí la solución de todos los problemas económicos que padecemos. Sin embargo, un ahorro considerable en ese ámbito, unido al efecto positivo que tendría la disminución de la importancia política del sector militar, introduciría una mejora considerable en las condiciones de vida de todos nuestros pueblos y mayor grado de estabilidad democrática.

La búsqueda de una nueva opción política

A tono con las tendencias más universales, América Latina se orienta hoy hacia un sistema que exalta la libertad empresarial y eleva la eficiencia económica al rango de virtud suprema. Se invoca el principio, moralmente aceptable, de que sólo una sociedad próspera puede satisfacer con justicia las necesidades materiales de los individuos. Pero se tiende a suponer que la abundancia, por sí sola, asegura la justicia, y que el enriquecimiento individual es, por sí mismo, un valor al que no se le deben poner obstáculos. No se plantea la justa distribución de la riqueza como una meta obligada.

La ventaja colectiva del enriquecimiento, traducida en el logro de sociedades más solidarias y más justas, debe figurar como objetivo de las nuevas opciones políticas en todo el mundo. Pero también es moralmente inaceptable que la prosperidad de algunas sociedades sea producto de la miseria y el sufrimiento de los integrantes de otras. El suministro de armas a los países en vías de desarrollo, fuente de riqueza para algunas sociedades, ha condenado a la miseria a millones, muchos de ellos en América Latina. En Centroamérica pudimos ver muy de cerca el injusto resultado de una actividad económica que genera, en los países pobres, miseria, guerra y opresión. El enriquecimiento, mediante la venta de armas a los países en vías de desarrollo, es intrínsecamente inmoral.

Un mundo simbiótico

El crecimiento demográfico y los avances en las comunicaciones, en las relaciones comerciales y en el intercambio cultural, han creado una simbiosis planetaria sin precedentes. Ninguna nación puede vivir tranquila tan sólo con su propia estabilidad interna. La paz y la estabilidad de Europa y Norteamérica no podrían estar seguras mientras haya, en otras regiones del mundo, focos de conmoción social o política. Los focos de inestabilidad y de conflicto se dan, en y entre los países en vías de desarrollo, principalmente como producto de la injusticia social y de la pobreza. Para que éstas desaparezcan es necesario que los países menos privilegiados tengan la oportunidad de alcanzar cierto grado de desarrollo sostenido.

Algunos sectores de las naciones industrializadas sostienen que el desarme traería desempleo y miseria para muchos ciudadanos de sus países, y que no es justo condenar a la desocupación a miles y miles de trabajadores de la industria bélica. Por otra parte, la mayoría de los países latinoamericanos, en la búsqueda de una inserción más eficiente en la nueva economía mundial, se han sometido a procesos de ajuste de elevadísimo costo social. Eso ha sido el oneroso aporte que nuestros pueblos han dado al ordenamiento económico internacional. Momentáneamente, eso ha significado aumento de la desocupación y un empobrecimiento generalizado. La transformación de la industria bélica de los países ricos en actividades económicas propias de un mundo en paz, traerá ciertamente efectos negativos que deben interpretarse como una justa contrapartida de nuestro sacrificio.

La desmilitarización: un imperativo

La desmilitarización de América Latina es una condición necesaria para el fortalecimiento de las frágiles instituciones políticas en las que se basa su nueva democracia. Es necesaria también para facilitar su desarrollo económico y social. Esto se aplica a los países en vías de desarrollo de otras regiones. Pero ¿es posible esperar que la desmilitarización cobre impulso con base en la decisión voluntaria de cada uno de los países?

En nuestro Continente, sólo dos pequeños estados, Costa Rica y Panamá, han asumido las ventajas y los riesgos del desarme voluntario. Esto no es suficiente ante la urgencia de avanzar en el proceso de desmilitarización. El desarme y la reorientación de los recursos hacia fines pacíficos deben ser un empeño colectivo de la comunidad internacional.

Los países latinoamericanos deben apoyar las iniciativas dirigidas a lograr que las Naciones Unidas y los organismos supranacionales de carácter regional asuman un papel activo en el control del tráfico de armamentos en todo el mundo. Como ciudadano de un país sin armas, he venido invitando a quienes puedan oírme a unirnos en la lucha por el establecimiento de una convención internacional destinada a ponerle freno al negocio de las armas, de tal modo que todos los gobiernos queden obligados a declarar con exactitud las cantidades y los precios de las armas exportadas e importadas por cada país, y a suprimir los subsidios a la producción bélica.

Estarán ustedes de acuerdo conmigo en que no basta con el Registro de las transferencias de armas convencionales de las Naciones Unidas, al cual los países productores comunican, de manera voluntaria, los tipos y las cantidades de armas que exportan, pero no sus costos. ¿Por qué todo ciudadano recibe libremente información sobre los precios del oro, la plata, el café o el azúcar, y no puede conocer el precio de un tanque, un helicóptero artillado o un avión militar? ¿Acaso no es una doble moral predicar la transparencia en los asuntos públicos mientras se permite el secreto en este comercio de la muerte?

Otro instrumento aceptable, dentro del propósito de avanzar en el desarme, es la vinculación de la ayuda económica para el desarrollo al nivel de gasto militar de los Estados receptores. La disponibilidad de recursos para esa ayuda es limitada y las naciones que la suministran tienen el deber de prestarla sin otras condiciones que las que se refieren a su uso con fines pacíficos y de sentido social. Es razonable, entonces, que existan mecanismos para evitar que la ayuda para el desarrollo permita a los gobiernos de los países pobres desplazar recursos de los sectores sociales al sector militar.

Otra visión de la cooperación internacional

En nuestro tiempo es indiscutible el principio de justicia que se cumple con la cooperación. Así como, hasta hace poco tiempo, las relaciones Este-Oeste se caracterizaron por la tensión y el enfrentamiento ideológico, las relaciones Sur-Norte continúan caracterizándose por la injusticia, la indiferencia y el desequilibrio. Esta es justificación suficiente para la demanda de que se dedique una parte de los recursos que liberaría el desarme a atender las necesidades de cooperación con los países menos desarrollados.

Con la firme creencia de que es posible llevar a cabo en el ámbito mundial lo que hemos hecho en Costa Rica y Panamá gracias a la desmilitarización, he venido sugiriendo que se cree dentro del sistema de la ONU un Fondo Global para la Desmilitarización. Entre 1987 y 1994, el gasto militar del mundo se redujo a un ritmo no inferior al tres por ciento anual, lo que significa un dividendo de paz acumulado estimado en 935.000 millones de dólares, suma que debería haber contribuido sustancialmente al logro de la paz global y la seguridad humana. He sugerido que todas las naciones podrían comprometerse a aportar al fondo propuesto una pequeña parte de sus reducciones anuales del gasto militar. De este modo, se dispondría de una porción de los dividendos de la paz para dedicarla al logro de la seguridad humana, mediante el estímulo de los procesos de desmilitarización, desmovilización y reconversión de las fuerzas armadas, y a la ampliación de las metas de democratización y de desarrollo de los países menos desarrollados.

Una formulación correcta del desarrollo

A partir de ahora, no son aceptables aquellas metas de desarrollo que no se hayan definido con base en el grado de mejoramiento humano que ellas habrán de generar. Los términos materiales del desarrollo, si bien siguen siendo importantes, no constituyen su dimensión fundamental. En su definición ideal, los índices de desarrollo deben medir, con la mayor precisión posible, el grado de felicidad que una sociedad brinda a cada uno de los seres humanos que la componen.

Es responsabilidad de la dirigencia latinoamericana hacer que nuestros pueblos aprovechen la actual coyuntura de consenso democrático para definir correctamente el tipo de desarrollo que debemos propiciar. Nunca como ahora, se había visto con tanta claridad el hecho de que el concepto de desarrollo debe incluir un componente de orden moral, al que deben condicionarse todos los demás.

El fracaso de la formulación marxista del desarrollo ha despertado, en muchos círculos de poder, pretensiones de simplificación sumamente peligrosas. Se quiere interpretar la llamada muerte del comunismo como el triunfo definitivo de las tesis que depositan todos los atributos de libertad y de justicia en la eficiencia económica. Dentro de esta interpretación terminal de la historia, el concepto de desarrollo se reduce mecánicamente al logro de una prosperidad colectiva carente de significado humano. Paradójicamente, se trata de consagrar, en nombre de la libertad de mercado, la deshumanización que justamente se le atri-

buyó a la monstruosa colectivización estaliniana. Se pasa, así, por alto, el hecho de que la felicidad humana, compuesta por lo menos de libertad y de bienestar material, es amenazada tanto por la opresión y la ineficacia de un sistema como por el despilfarro y la insensibilidad del otro. En ambos extremos, el desarrollo humano es postergado frente a valores en última instancia destructivos.

En el caso de América Latina, indudablemente bajo influencias externas pero también bajo la responsabilidad de nuestros dirigentes, se ha abierto una pugna —pugna y no debate— en torno a la importancia y el tamaño que debe tener el sector público, y en torno a la preeminencia que debe adjudicársele al sector privado en la economía. Se argumenta que el gigantismo estatal ha generado el despilfarro, que las empresas públicas son ineficientes, que el sector público emprende demasiados proyectos cuyo único fin es el prestigio político de partidos o de personas, que la excesiva intervención del Estado en la economía provoca la huida de capitales y la corrupción en gran escala.

Pero al mismo tiempo se ignoran el despilfarro y el deterioro ambiental provocado por el consumismo, el insuficiente escrutinio público sobre la eficiencia de las grandes empresas privadas, la sujeción del bienestar colectivo a los intereses de los conglomerados financieros poderosos, y la ya no tan oculta corrupción del sector privado.

Cada pueblo, su propia vía

Cada pueblo latinoamericano debe construir su propia institucionalidad democrática, con autonomía y de acuerdo con su experiencia histórica específica. No obstante, en este mundo simbiótico en el que vivimos, los problemas más importantes han adquirido una globalidad cuya consecuencia lógica es la integración de los pueblos según sus semejanzas culturales y sus comunidades de intereses. Existen una unidad cultural y una comunidad de intereses latinoamericanos, que nos llaman a la integración. Al mismo tiempo, por razones geográficas e históricas, tenemos planteada una opción integradora más amplia, de carácter continental, que debe ser sopesada y, si es del caso, acogida. Ha entrado en vigencia el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, con la participación de México, un importantísimo miembro de la comunidad latinoamericana. Es naturalmente previsible la incorporación, en el futuro próximo, de otros países de América Latina, si no de todos. Ante esta perspectiva, se hace más evidente la necesidad de que los pueblos latinoamericanos enfrenten coordinadamente sus problemas comunes.

No estamos derrotados

Amigas y amigos:

Al inicio, ésta pudo parecerles una irónica disertación literaria sobre un nuevo costarriqueñismo elevado a la consideración de la Real Academia de la Lengua. Espero haber contribuido a que cada uno de ustedes determine si a pesar de lo que América Latina puede parece «fregada», aún le queda la oportunidad de recuperar su tiempo perdido.

Deseo concluir con un comentario sobre lo que aún pervive, en el idioma y en la cultura, de aquel Imperio Español que efectivamente «se fregó» a principios del siglo XIX. Es posible que sorprenda a muchos saber que la entonces colonia de Costa Rica juró la Constitución Española de Cádiz en 1820, tan sólo quince meses antes de alcanzar, incruentamente, la independencia.

Esto no sería más que una anécdota trivial si no fuera porque aquella Constitución sirvió de base al funcionamiento de nuestro Estado costarricense durante varios años, y porque el aliento liberal de las Cortes de Cádiz se ha mantenido en muchas de las Constituciones latinoamericanas a lo largo de casi dos siglos. Cabe preguntarse si, así como existe una moderna democracia española basada en la diversidad cultural y política, habría sido posible vivir una democracia hispanoamericana como la que en buena medida prefiguraba la Constitución de Cádiz. Después de todo, esta especulación es explicable en un costarricense, ya que el diputado de Costa Rica ante aquellas Cortes, el presbítero Florencio del Castillo, dio los más importantes aportes a la configuración constitucional de los derechos de los indígenas, de los esclavos manumitidos y de los descendientes de esclavos. Además de que los definía como españoles a parte entera, la Constitución Española de 1812 les reconocía derechos que todavía, avanzado el siglo XX, en algunas de nuestras repúblicas los indígenas y los descendientes de los esclavos no pueden disfrutar.

Podemos concluir, entonces, en que el tronco ibérico de nuestra cultura es determinante a la hora de averiguar quiénes fueron los «fregados» de nuestra historia. Lo que importa, ahora, es saber qué debemos hacer para que no los haya más en España ni en Latinoamérica.

